



Sr. Estella Hoyos, Presidente en
sustitución

Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Pérez Solano, Consejero y
Ponente

Sr. Quijano González, Consejero
Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 22 de julio de 2004, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 23 de junio de 2004 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx debido a los daños ocasionados por la incursión de unos animales de la fauna salvaje en terrenos de su propiedad.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 24 de junio de 2004, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 429/2004, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación del mismo, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Pérez Solano.



Primero.- Con fecha 22 de julio de 2003, tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx una solicitud de indemnización, formulada por D. xxxxx xxxxx xxxxx, debido a los daños producidos por unos animales de la fauna salvaje en plantaciones de su propiedad, sitas en el término municipal de xxxxxxxxxxxx.

Posteriormente, a requerimiento de la Administración, presenta un documento acreditativo de la titularidad a su favor de los cultivos objeto de los daños cuya indemnización solicita, a través de una copia de la escritura pública de propiedad, así como una copia de precios de lonja de la semana del 10 al 16 de noviembre de 2003 y una fotocopia de la PAC del año 2003.

El reclamante cifra los daños en 330,30 euros.

Segundo.- El Técnico de la Sección de Vida Silvestre informa, en fecha 9 de enero de 2004, de que durante el año 2003 los ciervos fueron los causantes de los daños ocasionados en los cultivos de girasol sembrados en la finca nº xxxx del polígono x del término municipal de xxxxxxx, propiedad de D. xxxxx xxxxx xxxxxxx. Asimismo, señala que "los terrenos correspondientes a la parcela objeto de reclamación, (...) están clasificados a efectos cinegéticos, como coto privado de caza en concreto con número de matrícula xx-xxxxx. El titular de dicho acotado es la Sociedad de Cazadores xxxxxxx (...)", y que la valoración de los daños asciende a 123,20 euros.

Tercero.- En el trámite de audiencia concedido al interesado, éste no realiza alegación alguna.

Cuarto.- Con fecha 14 de abril de 2004, el Servicio Instructor formula una propuesta de resolución en el sentido de que procede desestimar la reclamación formulada, por carecer manifiestamente de fundamento. Señala en su fundamento de derecho séptimo que no resulta acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y los daños sufridos por la reclamante.

Quinto.- El 18 de febrero de 2004 la Asesoría Jurídica informa favorablemente sobre la propuesta de resolución indicada.



En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde a la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxx, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales o en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".



La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.



5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. xxxxx xxxxx xxxxx debido a los daños ocasionados por la incursión de unos animales de la fauna salvaje en terrenos de su propiedad.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es, antes de transcurrir el plazo de un año.

6ª.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada, estima este Consejo Consultivo, de igual modo que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que no existe responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños causados.

De acuerdo con el artículo 12.1.a) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, "la responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá:

»a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético.

»A tales efectos, tendrá la consideración de titular cinegético de las Zonas de Caza Controlada, la Junta o la sociedad de cazadores concesionaria, en su caso.

»b) En los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos, cuando la condición de vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta".

Asimismo, el artículo 18 del citado texto legal dispone que "el territorio de Castilla y León se clasificará, a los efectos de la caza, en terrenos cinegéticos y no cinegéticos". Tienen la consideración de terrenos cinegéticos las reservas



regionales de caza, los cotos de caza y las zonas de caza controlada, y de no cinegéticos los refugios de caza, las zonas de seguridad y los vedados.

En este caso parece que está acreditado que los daños fueron producidos por la incursión de unos ciervos, planteándose la cuestión sobre la clasificación cinegética de los terrenos donde se ubican las plantaciones dañadas.

Al respecto, a la luz de la normativa antes citada, así como del expediente tramitado y especialmente del informe emitido por el Técnico de la Sección de Vida Silvestre, puede entenderse que en el presente caso los terrenos correspondientes a la parcela objeto de reclamación están clasificados a efectos cinegéticos como coto privado de caza.

Así, el artículo 21 de la Ley de Caza dispone que “se denomina Coto de Caza toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético que haya sido declarada o reconocida como tal, mediante resolución del órgano competente (...). Se considerarán incluidos en un coto de caza aquellos predios enclavados en el mismo cuyos propietarios o titulares de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento cinegético no se manifiesten expresamente en contrario una vez que les haya sido notificada personalmente (...)”.

Este Consejo Consultivo considera que tales fincas deben considerarse incluidas en el citado coto de caza, por lo que, puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.a), la responsabilidad corresponde a los titulares del coto de caza.

Por último, hemos de señalar que a juicio de este Consejo Consultivo lo que procede es desestimar la solicitud de indemnización por las razones expuestas, pero no por carecer manifiestamente de fundamento; hay que recordar que en tales casos, conforme al artículo 89.4 de la mencionada Ley 30/1992, el pronunciamiento sobre el fondo estaría excusado.



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx xxxxx xxxxx debido a los daños ocasionados por la incursión de unos animales de la fauna salvaje en terrenos de su propiedad.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.